

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°233

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **DIEGO MARÍA DUQUE FRANCO** contra **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia se le aplique como norma anterior el Decreto 758 de 1990, debiéndosele aplicar una tasa de reemplazo del 90% por contar con 1391 semanas de cotización.

Se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar el retroactivo pensional causado entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 y reliquidar la pensión reconocida a partir del 1 de enero de 2020, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones manifiesta que nació el **10 de junio de 1953** y cotizó a **Colpensiones** un total de 1391 semanas entre el 23 de agosto de 1977 y el 30 de septiembre de 2017.

En el año 2015 considerando que reunía los requisitos para acceder a la pensión de vejez solicitó su reconocimiento, sin embargo, el mismo le fue negado por no cumplir con el número de semanas.

En el año 2019, previo pago por parte del empleador **Empaques Termotécnicos S.A.S.** de título pensional por los periodos en que se omitió la afiliación al sistema de pensiones, solicitó nuevamente la pensión de vejez, la cual en principio fue negada en la **Resolución SUB 289103 del 21 de octubre de 2019**, pero finalmente reconocida en la **Resolución SUB 330828 del 02 de diciembre de 2019**.

En este acto administrativo se tuvo en cuenta como norma pensional el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, reconociendo una mesada pensional de **\$1'911.239** pagadera desde el 1 de enero de 2020.

El valor de la mesada fue reliquidado en la Resolución DPE 893 del 17 de enero de 2020, mediante la cual se fijó en la suma de **\$1'914.240**.

Contestación Colpensiones

La entidad demandada a través de apoderado manifestó que son ciertos los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación de reliquidación, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

Sentencia de primera instancia

El Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **5 de mayo de 2022**, declaró que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable como norma anterior el Decreto 758 de 1990, por lo que en consecuencia **condenó a Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de vejez en cuantía inicial **\$2'514.531** a partir del **1 de octubre de 2017**.

Lo anterior, implica que entre la fecha del disfrute y el 31 de diciembre de 2019 se genere la obligación de reconocer de forma integral el retroactivo causado, debiendo desde el 1 de enero de 2020, asumir el mayor valor sobre la mesada que viene reconociendo.

Del valor de las mesadas pensionales y los mayores valores autorizó el descuento de los aportes al sistema de seguridad social en salud y sobre la suma de total de condena de **\$104'089.259** impuso a **Colpensiones** la obligación de reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 4 de febrero de 2020.

Esta decisión no la compartió la apoderada **Colpensiones** motivo por el cual la recurrió en los siguientes términos:

Recurso Demandada

La apoderada de **Colpensiones** solicita que se **revoque** la condena impuesta en lo referente al pago de retroactivo pensional causado entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, esto, por cuanto para el 2017 el actor no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, los que solo logró acreditar en el año 2019 cuando su empleador procedió a pagar un título pensional.

Alegatos de Conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la apoderada del demandante solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, por cuanto la posibilidad de validar tiempos laborados sin cotización por parte del trabajador es totalmente procedente en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Por su parte, el apoderado de **Colpensiones** solicitó que se **modifique** la decisión de primera instancia, por cuanto el actor no cumplía con los requisitos para que se le aplicara el Decreto 758 de 1990, en razón a que para el 25 de julio de 2005 apenas contaba con 579 semanas de cotización, por lo que no cumplía con los requisitos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2005.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Establecer si los tiempos pagados por el empleador omiso a la afiliación pueden ser computados para efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario del régimen de transición pensional, (ii) determinar cuál es la norma pensional aplicable al demandante, (iii) revisar la fecha desde la cual el actor tiene derecho a disfrutar del pago de mesada pensional y en tal medida verificar el valor de la mesada pensional y procede la reliquidación de la prestación que en la actualidad percibe el demandante y , (iv) establecer la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la fecha desde la cual se causan.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. El señor **Diego María Duque Franco** nació el **10 de junio de 1953** (02/pág.47).
2. El día **3 de octubre de 2019**, el actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez (02/pág.13).
3. A través de la **Resolución SUB 289103 del 21 de octubre de 2019, Colpensiones** le negó la prestación por no cumplir con el requisito de semanas cotizadas contenido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, toda vez que apenas contaba con un total de 1159 semanas (02/pág.17-19).
4. Frente a este acto administrativo interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto de forma favorable en la **Resolución SUB 330828 del 2 de diciembre de 2019**, en el que se reconoció la pensión de vejez teniendo en cuenta 1322 semanas de cotización, prestación liquidada en la suma de **\$1'911.239** producto de un IBL de \$3'000.847 y una tasa de reemplazo de 63,69%, pagadera desde el 1 de enero de 2020 (02/págs.25-32).

5. Mediante la **Resolución DPE del 17 de enero de 2020, Colpensiones** reliquidó el valor de la mesada pensional fijándola en la suma mensual de **\$1'986.981** (02/pág.37-46).
6. Conforme con la historia laboral actualizada a 13 de julio de 2020, el actor contaba con 1391,14 semanas cotizadas, de las cuales 192,85 fueron habilitadas a través del mecanismo del título pensional pagado por el empleador los días 27 de septiembre de 2019 y 16 de diciembre de 2019 (02/págs.48-54).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala al análisis del problema jurídico puesto en su conocimiento.

De la contabilización de las semanas pagadas a través de título pensional para efectos de la aplicación del régimen de transición pensional

Se discute por parte de la apoderada de **Colpensiones** el reconocimiento de la pensión de vejez desde el **1 de octubre de 2017**, pues a su juicio las semanas que fueron aportadas a través de título actuarial pagado por el empleador **Empaques Termotécnicos S.A.S.** en el año 2019 no pueden ser contabilizados de forma retroactiva.

Para responder a esta manifestación debe recordarse que de conformidad con el literal d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 son computables para efectos pensionales los tiempos de servicios en los que el empleador omitió afiliar a su trabajador, bajo el condicionamiento de que éste efectuó el pago de un cálculo actuarial realizado y recibido a satisfacción por la entidad de seguridad social.

Lo anterior implica que las semanas que sean pagadas bajo esta modalidad deben ser habilitadas para efectos pensionales en condiciones similares a las que fueron aportadas en tiempo, y ello desde luego implica que deban ser tenidas en cuenta para cumplir con el requisito de cotización de normas como el Decreto 758 de 1990, aspecto bien explicado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-3005-2020 donde reiterando su línea jurisprudencial expuso como regla lo siguiente:

Esta Corporación en varias decisiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a la inconformidad aquí planteada, en el sentido de indicar que es posible acumular tiempos correspondientes a periodos cuya afiliación es omitida por el empleador, a través de cálculo actuarial, a los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sea cual fuere la causa de la omisión.

Lo anterior significa que es viable tener en cuenta esos periodos como efectivamente cotizados o sufragados, por efecto del pago del cálculo actuarial y, a su vez, aplicar para el caso el Acuerdo 049 de 1990 con amparo en el régimen de transición.

A partir de lo explicado, es claro para la Sala que no incurrió el a-quo en el yerro del que se le acusa en la impugnación, pues se reitera el pago del cálculo actuarial a satisfacción de **Colpensiones** permite que sean contabilizadas las semanas comprendidas entre los ciclos marzo de 2002 y agosto de 2006, que fueran pagadas en el año 2019, de tal forma que al ser acertada la decisión de primera instancia en este aspecto se **confirmará**.

Del beneficio de la transición y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 como régimen anterior

El artículo 36 de la ley 100 de 1993, con motivo del advenimiento a la vida jurídica del régimen general de pensiones, estableció la transición pensional con el ánimo de respetar expectativas de derecho, teniendo en cuenta para el efecto los siguientes grupos poblacionales: mujeres con 35 años o más de edad, hombres con 40 años de edad o más y a quienes a la fecha de su entrada en vigencia hubieran cotizado por 15 o más años, a quienes se les respeto de la norma anterior que les era aplicable las condiciones de edad tiempo y monto.

Luego el acto legislativo de 01 vigente desde el 25 de julio de 2005 modificó estas condiciones y limitó en el tiempo el cumplimiento de los requisitos de la siguiente forma:

El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

En lo que toca con el actor resulta claro que es beneficiario de la transición pensional, puesto que, para el 1 de abril de 1994 contaba con 40 años de edad, puesto que, nació el **10 de junio de 1953** (02/pág.47), y a **25 de julio de 2005** contaba con 770,71 semanas cotizadas por lo que mantuvo el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014.

Así las cosas, en su calidad de trabajador privado afiliado al **ISS** hoy **Colpensiones** le es aplicable el Decreto 758 de 1990, norma que exige para el reconocimiento de la pensión de vejez en el caso de los hombres 60 años de edad y 1000 de cotización en cualquier tiempo, requisitos que cumplió antes del 31 de diciembre de 2014, ello en la medida que las semanas las alcanzo para el ciclo enero de 2010 y la edad la cumplió el **10 de junio de 2013**.

En este punto se debe dejar claro que dicho cómputo solo es posible realizarlo a partir del año 2019 cuando por virtud del cálculo actuarial pagado al empleador, se habilitaron 231,43 semanas, pagadas por el periodo comprendido entre el marzo de 2002 y agosto de 2006, debiéndose indicar por lo demás que al estar cumplidos los requisitos para el reconocimiento de la prestación en los términos del Decreto 758 de 1990 debe ser esta norma la aplicada como en forma acertada lo concluyó el juez a-quo, por lo que en este aspecto se **confirma** el fallo consultado.

La desafiliación del sistema como requisito para el disfrute de la pensión de vejez

Para establecer si es procedente la condena impuesta por el Juez al pago del retroactivo de la pensión de vejez, es importante recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 el retiro del sistema es un requisito previo para disfrutar del pago de la pensión, condición que se desprende con claridad de la literalidad de la norma, no obstante, esta conclusión en principio lógica no se corresponde con la razonabilidad de ciertos casos particulares en los que se debe atender a los principios propios de la seguridad social.

Para este fin la jurisprudencia ha elaborado una regla hermenéutica que consulta la realidad del caso, consistente en establecer a partir de los hechos manifestados por el afiliado, su intención de disfrutar de la pensión de vejez. En este contexto conductas como el cese definitivo de cotizaciones o la reclamación de la pensión tienen una verdadera relevancia.

Acerca de esta lectura disímil de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-5603 del 6 de abril de 2016, oportunidad en la que indicó:

Este ejercicio de búsqueda de soluciones proporcionales y coherentes valorativamente, no implica una transgresión a las reglas metodológicas de interpretación jurídica. Antes bien, parte del correcto entendimiento que la utilización de las reglas interpretativas excluye su aplicación

aislada y descontextualizada de los elementos externos. Además, en el sistema legal, la hermenéutica jurídica no se agota en la gramática o el análisis del lenguaje de los textos, pues existen otros métodos igualmente válidos que deben ser conjugados y armonizados para desentrañar el contenido de las disposiciones legales.

En este sentido, mal haría el juzgador, excusado en que la norma es «clara» y en la idea errada subyacente de la infalibilidad del legislador, llegar a soluciones abiertamente incompatibles y desalineadas frente a lo que constituye el marco axiológico del ordenamiento jurídico. Por esto, un adecuado ejercicio hermenéutico debe integrar las distintas reglas de interpretación y los factores relevantes de cada caso, en procura de ofrecer soluciones aceptables y satisfactorias.

Antecedentes más recientes de esta tesis pueden encontrarse en las sentencias SL-2607-2021 y SL-2453-2021, resumiéndose su regla de decisión en que además del retiro formal, existen otras formas de retiro expresas que se derivan de la voluntad del afiliado de disfrutar de la pensión como lo son el cese de cotizaciones y la reclamación de la pensión.

En lo que respecta al caso de autos, se encuentra que el empleador del señor **Diego María Duque Franco** realizó cotizaciones hasta el mes de septiembre de 2017 cuando cesó en forma definitiva de realizar cotizaciones (08/pág.13), sin que para ese momento reportara el retiro del sistema, omisión que no puede causar como consecuencia la pérdida del derecho a su retroactivo pensional, máxime cuando en este caso en particular se encuentra que el demandante desde el **30 de diciembre de 2014** había manifestado su deseo de disfrutar de la pensión como se lee en la **Resolución GNR 85910 del 25 de marzo de 2015** (Exp.Admtivo), sin embargo, su reconocimiento no fue posible pues para aquel momento hacían falta las semanas que mediante cálculo pensional se habilitaron en septiembre y diciembre de 2019.

En orden a lo expuesto y siguiendo el precedente del que se hizo cita advierte la Sala que fue acertada la decisión del juez a-quo por lo que para efectos de disfrute de la pensión se tendrá como fecha inicial el **1 de octubre de 2017** día siguiente al de la última cotización, lo que implica que se genere un retroactivo pensional entre esa fecha y el **31 de diciembre de 2019**, punto en el que se encuentra le asistió razón al a-quo.

Del valor de la mesada pensional

Tratándose de una prestación reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, el IBL debe liquidarse bajo los lineamientos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que prescribe el siguiente método “... *promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.*” o el de toda la vida laboral cuando cuente con más de 1250 semanas.

En el caso estudiado la Sala procedió a liquidar el IBL en la hipótesis de los 10 años por ser la revisada en virtud de la consulta, para lo cual tomo como índice final el IPC vigente para el **31 de diciembre de 2016**¹ fijado por el DANE en 93,11, y los aportes efectuados durante los últimos 3600 días entre el **1 de septiembre de 2007** y el **30 de septiembre de 2017**, evidenciando que el cálculo realizado por el a-quo resulta correcto.

En ese orden al obtenerse un IBL de \$ **2.793.923** y una tasa de reemplazo del 90% en atención a que el señor **Duque Franco** cotizó más de 1250 semanas, el valor inicial de la pensión de vejez asciende a \$**2’514.531** pagadera desde el 1 de octubre de 2017 a razón de 13 mesadas por anualidad lo que supone un retroactivo pensional a reconocer entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2019, por la suma de \$**79’191.905**, como se observa en el siguiente cuadro:

Retroactivo Pensional				
2017	4,09%	4	\$ 2.514.531	\$ 10.058.124
2018	3,18%	13	\$ 2.617.375	\$ 34.025.879
2019	3,80%	13	\$ 2.700.608	\$ 35.107.902
TOTAL				\$ 79.191.905

Con posterioridad al **1 de enero de 2020**, como quiera que **Colpensiones** viene reconociendo una mesada pensional por valor de \$**1’986.981** lo procedente es el pago de un mayor valor producto de la reliquidación que liquidado hasta el mes de abril de 2022, asciende a \$ **24’897.353**, como se ve en el siguiente cuadro:

Mayor valor reliquidación						
Año	IPC	Pagado	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2020	1,61%	\$ 1.986.981	\$ 2.803.231	\$ 816.250	13	\$ 10.611.249
2021	5,62%	\$ 2.018.971	\$ 2.848.363	\$ 829.392	13	\$ 10.782.090
2022		\$ 2.132.438	\$ 3.008.441	\$ 876.003	4	\$ 3.504.014
					TOTAL	\$ 24.897.353

¹ Según serie empalme 2018: 100

Finalmente, al sumarse las dos sumas objeto de condena el valor que debe reconocer **Colpensiones** al señor **Diego María Duque Franco** asciende a la suma de **\$104'089.259**, por lo que se encuentra que fue acertada la condena impuesta en el numeral segundo de la decisión consultada por lo que se **confirmará**.

De la procedencia de la prescripción

Atendiendo a que en la contestación de la demanda se propuso por **Colpensiones** la prescripción, esta Sala procedió a estudiarla respecto de las mesadas pensionales y mayores valores objeto de condena, encontrando que la misma **no se configura**, teniendo en cuenta que el primero de los derechos reclamados fue exigible el **1 de noviembre de 2017**, (mes siguiente al de su causación) y la demanda laboral fue radicada el **11 de agosto de 2020** (00/pág.1), sin que entre ambas fechas transcurriera el plazo de tres años establecido en el artículo 151 del CPT y SS para los derechos que emanen de leyes sociales.

De la condena al pago de los intereses moratorios

En lo que respecta al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, aspecto revisado en virtud del grado jurisdiccional de consulta, esta Sala debe partir de una diferenciación que omitió al juez de primera instancia, consistente en establecer que sumas son las adeudadas por retroactivo pensional y establecer cuáles son los efectos del retardo en el pago de las mismas y cuales corresponden al mayor valor producto de la reliquidación de la pensión y cuáles son los efectos con respecto de estas sumas.

En virtud de lo anterior, encuentra la Sala que se trata de dos temas que merecen un estudio de forma individual y pormenorizada, puesto que se trata de situaciones diferentes.

Procedencia de los intereses moratorios respecto de las mesadas retroactivas adeudadas

Referente a la procedencia de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es necesario recordar que esta medida de carácter resarcitorio fue creada por el legislador con una doble finalidad la de evitar que las entidades de pensiones se tomen términos excesivos para la resolución de las peticiones pensionales y reafirmar el carácter de vital que tienen las pensiones permitiendo que las personas que sean sometidas a una larga espera en el reconocimiento sean resarcidas, es por ello que no se considera en su causación elementos subjetivos como la conducta de las AFP .

Pese a lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que existen razones objetivas en las que la negativa del pago de la pensión no genera la carga de pagar intereses, las cuales se fundamentan en la imposibilidad de las AFP para resolver respecto de una falta de certeza de los beneficiarios o porque aplican la norma bajo un entendimiento plausible, concepto que es bien explicado en la sentencia SL-2772 de 2021.

En lo que tiene que ver con el caso de autos, se advierte que el señor **Diego María Duque Franco** solicitó la pensión de vejez ante **Colpensiones** el **día 3 de octubre de 2019** (02/pág.17), luego los dineros que le fueran adeudados por mesadas pensionales debieron ser reconocidos a más tardar hasta el **3 de febrero de 2020**, cuando se cumplió el plazo estipulado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, para el reconocimiento la prestación.

Pero este pago se presentó apenas de forma parcial, puesto que la **Resolución SUB 330828 del 2 de diciembre de 2019** (02/pág.25-.32) solo comenzó a reconocer el pago de mesadas pensionales a partir del **1 de enero de 2020**, lo que supone la no cancelación de **\$79'191.905** que por concepto de mesadas se causaron entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, cifra respecto de la cual proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el **4 de febrero de 2019** y hasta la fecha en que su pago se haga efectivo, por lo que le asiste razón parcial al juez a-quo, debiéndose en este aspecto **revocar parcialmente** el numeral tercero la decisión de primera instancia.

Procedencia de los intereses moratorios sobre mayores valores producto de la reliquidación de la mesada pensional

El otro concepto reconocido en la sentencia es el que tiene que ver con el valor producto de la reliquidación de la mesada pensional, respecto del cual el juez a-quo consideró que eran exigibles los intereses moratorios y procedió a concederlos desde el **4 de febrero de 2019**, argumento que el criterio jurisprudencial actual es que frente a estas diferencias también procede el pago de esta medida resarcitoria.

Esta manifestación la sustentó el a-quo, en el criterio sostenido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia SL-3130-2020, en la que ese Tribunal cambió su jurisprudencia, para sostener que proceden intereses moratorios sobre mayores valores producto de reliquidación con base en las siguientes razones: (i) el legislador en el texto del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no hizo distinción “... *ni en función de la clase de pensión legal que les sirviera de base,(...), ni teniendo en cuenta si se trataba del pago*

completo de la mesada pensional o tan solo de algún saldo”, (ii) “...la mora en el cumplimiento de una obligación, como el pago de la mesada pensional, se produce tanto por la insatisfacción de todo lo debido como por su pago incompleto o deficitario”, (iii) el pago de las obligaciones a cargo del deudor debe realizarse de forma completa; y (iv) en el caso de sanciones impuestas al empleador por el no pago de salarios y prestaciones, las mismas proceden, tanto cuando se adeuda su totalidad como cuando se deben valores parciales.

Esta tesis fue reiterada en las sentencias SL-4658-2020 y SL-4942-2020 y es la actualmente imperante en el máximo órgano de la justicia ordinaria laboral, posición que es conocida por este Tribunal, pero de la que se aparta atendiendo a los criterios que de antaño sostuvo la Corte y es que los nuevos planteamientos si bien contienen argumentos sólidos y respetados, lo cierto es que no explican el aparte literal de la norma que establece los intereses de mora proceden en el pago de las mesadas pensionales, frase que llevó a que por cerca de 20 años y de manera uniforme se sostuviera que los intereses no proceden sobre mayores valores pensionales, lo que se lee en la sentencia Rad.13717 del 30 de junio de 2000, donde se indicó:

4.- Respecto de los intereses de mora en el pago de las mesadas pensionales, que plantea el tercer cargo, concedidos por el Juzgado con fundamento en la facultad extra petita, y que el Tribunal revocó, argumentando que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 “hace referencia al no pago total de la mesada pensional, y en el caso que nos ocupa es por un reajuste equivalente a un 0.42%, producto de no acoger la empleadora el tiempo real laborado por el actor”, debe decirse que dicha interpretación es la que se acomoda a la disposición en cita, puesto que, en verdad, aquellos proceden sólo en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial.

Además de ello el criterio de interpretación literal no fue el único que acompañó los argumentos de la Corte, si no que este le siguió una interpretación finalista no desvirtuada con los nuevos argumentos y que consiste en que la norma tuvo dos objetivos fundamentales proteger a los pensionados para que sus mesadas se pagaran en tiempo y unificar los diferentes medios de resarcimiento existentes antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, como lo explicará la Corte Constitucional en la sentencia C-601 de 2000.

Respecto de esa finalidad protectora de la mesada es bien clara la Corte Suprema de Justicia, cuando en la sentencia del 41392 del 6 de diciembre de 2011, donde se expresó:

Sobre esta base es claro que el ad quem le dio una inteligencia a la norma acorde a lo que ha sostenido esta Corporación sobre el asunto, en cuanto al carácter resarcitorio de los intereses moratorios cuyo fin es el de paliar, en cierto modo, la pérdida del poder adquisitivo del dinero...

En ese orden, entiende esta Sala que la finalidad del artículo 141 del artículo de la Ley 100 de 1993 se circunscribe de forma exclusiva al pago de la mesada pensional como de forma literal lo señala la norma, pues es esta la que se protege, luego los mayores valores que puedan generarse como producto de interpretaciones normativas o errores en los cálculos o como en el caso que se estudia el reajuste de la prestación teniendo en cuenta una mayor tasa de reemplazo son aspectos ajenos a la finalidad de la norma, los que sin embargo, no generan desprotección en el pensionado, puesto que a efecto de garantizar el poder adquisitivo del dinero es procedente la indexación.

Así las cosas, y conforme con lo explicado esta sala **revocará parcialmente** la decisión de primera instancia en lo referente al reconocimiento pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con respecto a los mayores valores reconocidos a partir del **1 de enero de 2020**, cifras respecto de las cuales se **condenará a Colpensiones** a reconocer la indexación atendiendo para ello a la fecha de exigibilidad individual de cada valor y el momento de su pago efectivo, para lo cual deberá aplicar la fórmula: $Va = \text{Valor a indexar} \times \text{índice final} / \text{índice inicial}$.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la providencia de primera instancia dictada el día **5 de mayo de 2022**, por el Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **DIEGO MARÍA DUQUE FRANCO** contra **COLPENSIONES**. Conforme a lo expuesto en la parte motiva, el numeral tercero de la decisión de primera instancia quedará del siguiente tenor literal:

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor **DIEGO MARÍA DUQUE FRANCO** los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre la suma de **\$79'191.905**, los cuales deberán ser liquidados a partir del **4 de febrero de 2020** y hasta la fecha en que se efectuó el pago de la obligación a su cargo.

ABSOLVER a COLPENSIONES del reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con respecto a los mayores valores producto de la reliquidación pensional, en su lugar se **CONDENA a COLPENSIONES** a reconocer y pagar al señor **DIEGO MARÍA DUQUE FRANCO** la indexación de cada uno de los mayores valores causados desde el 1 de enero de 2020 teniendo en cuenta la fecha de su exigibilidad individual y la de su pago, para lo cual deberá aplicar la fórmula expuesta en la parte motiva.

SEGUNDO: En lo demás se **CONFIRMA** la decisión de primera instancia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Diego María Duque Franco
Demandado	Colpensiones
Radicado	05001-31-05-009-2020-00242-01
Decisión	Confirma y revoca parcialmente sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 18 de agosto de 2022 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 18 de agosto de 2022 a las
5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO